

IIDH

Instituto Interamericano
de Derechos Humanos



Convención Interamericana contra la Corrupción

Inter-American Convention Against Corruption

IIDH
Instituto Interamericano
de Derechos Humanos



**CONVENCIÓN INTERAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCIÓN**

**INTER-AMERICAN CONVENTION
AGAINST CORRUPTION**

San José, junio de 2005

 **Asdi**
AGENCIA SUECA
DE COOPERACION
INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO


NORWEGIAN MINISTRY
OF FOREIGN AFFAIRS

ÍNDICE / CONTENTS

Convención Interamericana contra la Corrupción ¹	5
Inter-American Convention Against Corruption ²	19

1 El estado de firmas y ratificaciones puede consultarse en el sitio web de la Organización de los Estados Americanos: <http://www.oas.org>.

2 Signatories and ratifications may be consulted at the Organization of American States website: <http://www.oas.org>.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

(Adoptada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 29 de marzo de 1996)

Preámbulo

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;

CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;

PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social;

RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos;

CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción;

RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente;

CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en

el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de los bienes producto de estos actos;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles;

TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y

DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio,

HAN CONVENIDO

en suscribir la siguiente

**CONVENCIÓN INTERAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCIÓN**

Artículo I - Definiciones

Para los fines de la presente Convención, se entiende por:

“Función pública”, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

“Funcionario público”, “Oficial Gubernamental” o “Servidor público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.

“Bienes”, los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

Artículo II - Propósitos

Los propósitos de la presente Convención son:

1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

Artículo III - Medidas preventivas

A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública.
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.
3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.
4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.

5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.

6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción.

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de los Estados Partes.

8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.

9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción.

11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.

12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.

Artículo IV - Ámbito

La presente Convención es aplicable siempre que el presunto acto de corrupción se haya cometido o produzca sus efectos en un Estado Parte.

Artículo V - Jurisdicción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de

conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.

3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto delincuente.

4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal establecida por una Parte en virtud de su legislación nacional.

Artículo VI - Actos de corrupción

1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción:

- a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
- b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
- c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;

d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y

e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.

2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados Partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.

Artículo VII - Legislación interna

Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descritos en el Artículo VI.1. y para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente Convención.

Artículo VIII - Soborno transnacional

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.

Artículo IX - Enriquecimiento ilícito

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho

adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de la presente Convención.

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.

Artículo X - Notificación

Cuando un Estado Parte adopte la legislación a la que se refieren los párrafos 1 de los artículos VIII y IX, lo notificará al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, quien lo notificará a su vez a los demás Estados Partes. Los delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito serán considerados para ese Estado Parte acto de corrupción para los propósitos de esta Convención, transcurridos treinta días contados a partir de la fecha de esa notificación.

Artículo XI - Desarrollo progresivo

1. A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de las legislaciones nacionales y la consecución de los objetivos de esta Convención, los Estados Partes estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificación en sus legislaciones de las siguientes conductas:

- a. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada.
- b. El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función desempeñada.

c. Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado.

d. La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa.

2. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado estos delitos, éstos serán considerados actos de corrupción para los propósitos de la presente Convención.

3. Aquellos Estados Partes que no hayan tipificado los delitos descritos en este artículo brindarán la asistencia y cooperación previstas en esta Convención en relación con ellos, en la medida en que sus leyes lo permitan.

Artículo XII - Efectos sobre el patrimonio del Estado

Para la aplicación de esta Convención, no será necesario que los actos de corrupción descritos en la misma produzcan perjuicio patrimonial al Estado.

Artículo XIII - Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los Estados Partes de conformidad con esta Convención.

2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.

3. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte, con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.

4. Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede denegar la extradición.

6. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o porque el Estado Parte requerido se considere competente, éste presentará el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento, a menos que se haya convenido otra cosa con el Estado Parte requirente, e informará oportunamente a éste de su resultado final.

7. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.

Artículo XIV - Asistencia y cooperación

1. Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia recíproca, de conformidad con sus leyes y los tratados aplicables, dando curso a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento de los actos de corrupción descritos en la presente Convención, a los fines de la obtención de pruebas y la realización de otros actos necesarios para facilitar los procesos y actuaciones referentes a la investigación o juzgamiento de actos de corrupción.

2. Asimismo, los Estados Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica mutua sobre las formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción. Con tal propósito, propiciarán el intercambio de experiencias por medio de acuerdos y reuniones entre los órganos e instituciones competentes y otorgarán especial

atención a las formas y métodos de participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

Artículo XV - Medidas sobre bienes

1. De acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la presente Convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.

2. El Estado Parte que aplique sus propias sentencias de decomiso, o las de otro Estado Parte, con respecto a los bienes o productos descritos en el párrafo anterior, de este artículo, dispondrá de tales bienes o productos de acuerdo con su propia legislación. En la medida en que lo permitan sus leyes y en las condiciones que considere apropiadas, ese Estado Parte podrá transferir total o parcialmente dichos bienes o productos a otro Estado Parte que haya asistido en la investigación o en las actuaciones judiciales conexas.

Artículo XVI - Secreto bancario

1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a proporcionar la asistencia solicitada por el Estado Parte requirente amparándose en el secreto bancario. Este artículo será aplicado por el Estado Parte requerido, de conformidad con su derecho interno, sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos bilaterales o multilaterales que lo vinculen con el Estado Parte requirente.

2. El Estado Parte requirente se obliga a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario que reciba, para ningún fin distinto del proceso para el cual hayan sido solicitadas, salvo autorización del Estado Parte requerido.

Artículo XVII - Naturaleza del acto

A los fines previstos en los artículos XIII, XIV, XV y XVI de la presente Convención, el hecho de que los bienes obtenidos o derivados de un acto de corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o el hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con

finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un delito político o como un delito común conexo con un delito político.

Artículo XVIII - Autoridades centrales

1. Para los propósitos de la asistencia y cooperación internacional previstas en el marco de esta Convención, cada Estado Parte podrá designar una autoridad central o podrá utilizar las autoridades centrales contempladas en los tratados pertinentes u otros acuerdos.

2. Las autoridades centrales se encargarán de formular y recibir las solicitudes de asistencia y cooperación a que se refiere la presente Convención.

3. Las autoridades centrales se comunicarán en forma directa para los efectos de la presente Convención.

Artículo XIX - Aplicación en el tiempo

Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados vigentes entre los Estados Partes, el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención, no impedirá la cooperación procesal penal internacional entre los Estados Partes. La presente disposición en ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta Convención.

Artículo XX - Otros acuerdos o prácticas

Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en el sentido de impedir que los Estados Partes se presten recíprocamente cooperación al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, vigentes o que se celebren en el futuro entre ellos, o de cualquier otro acuerdo o práctica aplicable.

Artículo XXI - Firma

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XXII - Ratificación

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XXIII - Adhesión

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo XXIV - Reservas

Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósitos de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo XXV - Entrada en vigor

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo XXVI - Denuncia

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualesquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados Partes.

Artículo XXVII - Protocolos adicionales

Cualquier Estado Parte podrá someter a la consideración de los otros Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la

Organización de los Estados Americanos, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención con el objeto de contribuir al logro de los propósitos enunciados en su Artículo II.

Cada protocolo adicional fijará las modalidades de su entrada en vigor y se aplicará sólo entre los Estados Partes en dicho protocolo.

Artículo XXVIII - Depósito del instrumento original

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro de publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.

INTER-AMERICAN CONVENTION AGAINST CORRUPTION

(Adopted at the third plenary session,
held on March 29, 1996)

Preamble

THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES,

CONVINCED that corruption undermines the legitimacy of public institutions and strikes at society, moral order and justice, as well as at the comprehensive development of peoples;

CONSIDERING that representative democracy, an essential condition for stability, peace and development of the region, requires, by its nature, the combating of every form of corruption in the performance of public functions, as well as acts of corruption specifically related to such performance;

PERSUADED that fighting corruption strengthens democratic institutions and prevents distortions in the economy, improprieties in public administration and damage to a society's moral fiber;

RECOGNIZING that corruption is often a tool used by organized crime for the accomplishment of its purposes;

CONVINCED of the importance of making people in the countries of the region aware of this problem and its gravity, and of the need to strengthen participation by civil society in preventing and fighting corruption;

RECOGNIZING that, in some cases, corruption has international dimensions, which requires coordinated action by States to fight it effectively;

CONVINCED of the need for prompt adoption of an international instrument to promote and facilitate international cooperation in fighting corruption and, especially, in taking appropriate action against persons who commit acts of corruption in the performance of public functions, or acts specifically related to such performance, as well as appropriate measures with respect to the proceeds of such acts;

INTER-AMERICAN CONVENTION AGAINST CORRUPTION

DEEPLY CONCERNED by the steadily increasing links between corruption and the proceeds generated by illicit narcotics trafficking which undermine and threaten legitimate commercial and financial activities, and society, at all levels;

BEARING IN MIND the responsibility of States to hold corrupt persons accountable in order to combat corruption and to cooperate with one another for their efforts in this area to be effective; and

DETERMINED to make every effort to prevent, detect, punish and eradicate corruption in the performance of public functions and acts of corruption specifically related to such performance,

HAVE AGREED

to adopt the following

**INTER-AMERICAN CONVENTION
AGAINST CORRUPTION**

Article I - Definitions

For the purposes of this Convention:

“Public function” means any temporary or permanent, paid or honorary activity, performed by a natural person in the name of the State or in the service of the State or its institutions, at any level of its hierarchy.

“Public official”, “government official”, or “public servant” means any official or employee of the State or its agencies, including those who have been selected, appointed, or elected to perform activities or functions in the name of the State or in the service of the State, at any level of its hierarchy.

“Property” means assets of any kind, whether movable or immovable, tangible or intangible, and any document or legal instrument demonstrating, purporting to demonstrate, or relating to ownership or other rights pertaining to such assets.

Article II - Purposes

The purposes of this Convention are:

1. To promote and strengthen the development by each of the States Parties of the mechanisms needed to prevent, detect, punish and eradicate corruption; and

2. To promote, facilitate and regulate cooperation among the States Parties to ensure the effectiveness of measures and actions to prevent, detect, punish and eradicate corruption in the performance of public functions and acts of corruption specifically related to such performance.

Article III - Preventive Measures

For the purposes set forth in Article II of this Convention, the States Parties agree to consider the applicability of measures within their own institutional systems to create, maintain and strengthen:

1. Standards of conduct for the correct, honorable, and proper fulfillment of public functions. These standards shall be intended to prevent conflicts of interest and mandate the proper conservation and use of resources entrusted to government officials in the performance of their functions. These standards shall also establish measures and systems requiring government officials to report to appropriate authorities acts of corruption in the performance of public functions. Such measures should help preserve the public's confidence in the integrity of public servants and government processes.

2. Mechanisms to enforce these standards of conduct.

3. Instruction to government personnel to ensure proper understanding of their responsibilities and the ethical rules governing their activities.

4. Systems for registering the income, assets and liabilities of persons who perform public functions in certain posts as specified by law and, where appropriate, for making such registrations public.

5. Systems of government hiring and procurement of goods and services that assure the openness, equity and efficiency of such systems.

6. Government revenue collection and control systems that deter corruption.

7. Laws that deny favorable tax treatment for any individual or corporation for expenditures made in violation of the anticorruption laws of the States Parties.

8. Systems for protecting public servants and private citizens who, in good faith, report acts of corruption, including protection of their identities,

in accordance with their Constitutions and the basic principles of their domestic legal systems.

9. Oversight bodies with a view to implementing modern mechanisms for preventing, detecting, punishing and eradicating corrupt acts.

10. Deterrents to the bribery of domestic and foreign government officials, such as mechanisms to ensure that publicly held companies and other types of associations maintain books and records which, in reasonable detail, accurately reflect the acquisition and disposition of assets, and have sufficient internal accounting controls to enable their officers to detect corrupt acts.

11. Mechanisms to encourage participation by civil society and non-governmental organizations in efforts to prevent corruption.

12. The study of further preventive measures that take into account the relationship between equitable compensation and probity in public service.

Article IV - Scope

This Convention is applicable provided that the alleged act of corruption has been committed or has effects in a State Party.

Article V - Jurisdiction

1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offenses it has established in accordance with this Convention when the offense in question is committed in its territory.

2. Each State Party may adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offenses it has established in accordance with this Convention when the offense is committed by one of its nationals or by a person who habitually resides in its territory.

3. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offenses it has established in accordance with this Convention when the alleged criminal is present in its territory and it does not extradite such person to another country on the ground of the nationality of the alleged criminal.

4. This Convention does not preclude the application of any other rule of criminal jurisdiction established by a State Party under its domestic law.

Article VI - Acts of Corruption

1. This Convention is applicable to the following acts of corruption:
 - a. The solicitation or acceptance, directly or indirectly, by a government official or a person who performs public functions, of any article of monetary value, or other benefit, such as a gift, favor, promise or advantage for himself or for another person or entity, in exchange for any act or omission in the performance of his public functions;
 - b. The offering or granting, directly or indirectly, to a government official or a person who performs public functions, of any article of monetary value, or other benefit, such as a gift, favor, promise or advantage for himself or for another person or entity, in exchange for any act or omission in the performance of his public functions;
 - c. Any act or omission in the discharge of his duties by a government official or a person who performs public functions for the purpose of illicitly obtaining benefits for himself or for a third party;
 - d. The fraudulent use or concealment of property derived from any of the acts referred to in this article; and
 - e. Participation as a principal, coprincipal, instigator, accomplice or accessory after the fact, or in any other manner, in the commission or attempted commission of, or in any collaboration or conspiracy to commit, any of the acts referred to in this article.
2. This Convention shall also be applicable by mutual agreement between or among two or more States Parties with respect to any other act of corruption not described herein.

Article VII - Domestic Law

The States Parties that have not yet done so shall adopt the necessary legislative or other measures to establish as criminal offenses under their domestic law the acts of corruption described in Article VI(1) and to facilitate cooperation among themselves pursuant to this Convention.

Article VIII - Transnational Bribery

Subject to its Constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall prohibit and punish the offering or granting,

directly or indirectly, by its nationals, persons having their habitual residence in its territory, and businesses domiciled there, to a government official of another State, of any article of monetary value, or other benefit, such as a gift, favor, promise or advantage, in connection with any economic or commercial transaction in exchange for any act or omission in the performance of that official's public functions.

Among those States Parties that have established transnational bribery as an offense, such offense shall be considered an act of corruption for the purposes of this Convention.

Any State Party that has not established transnational bribery as an offense shall, insofar as its laws permit, provide assistance and cooperation with respect to this offense as provided in this Convention.

Article IX - Illicit Enrichment

Subject to its Constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party that has not yet done so shall take the necessary measures to establish under its laws as an offense a significant increase in the assets of a government official that he cannot reasonably explain in relation to his lawful earnings during the performance of his functions.

Among those States Parties that have established illicit enrichment as an offense, such offense shall be considered an act of corruption for the purposes of this Convention.

Any State Party that has not established illicit enrichment as an offense shall, insofar as its laws permit, provide assistance and cooperation with respect to this offense as provided in this Convention.

Article X - Notification

When a State Party adopts the legislation referred to in paragraph 1 of articles VIII and IX, it shall notify the Secretary General of the Organization of American States, who shall in turn notify the other States Parties. For the purposes of this Convention, the crimes of transnational bribery and illicit enrichment shall be considered acts of corruption for that State Party thirty days following the date of such notification.

Article XI - Progressive Development

1. In order to foster the development and harmonization of their domestic legislation and the attainment of the purposes of this Convention, the States Parties view as desirable, and undertake to consider, establishing as offenses under their laws the following acts:

a. The improper use by a government official or a person who performs public functions, for his own benefit or that of a third party, of any kind of classified or confidential information which that official or person who performs public functions has obtained because of, or in the performance of, his functions;

b. The improper use by a government official or a person who performs public functions, for his own benefit or that of a third party, of any kind of property belonging to the State or to any firm or institution in which the State has a proprietary interest, to which that official or person who performs public functions has access because of, or in the performance of, his functions;

c. Any act or omission by any person who, personally or through a third party, or acting as an intermediary, seeks to obtain a decision from a public authority whereby he illicitly obtains for himself or for another person any benefit or gain, whether or not such act or omission harms State property; and

d. The diversion by a government official, for purposes unrelated to those for which they were intended, for his own benefit or that of a third party, of any movable or immovable property, monies or securities belonging to the State, to an independent agency, or to an individual, that such official has received by virtue of his position for purposes of administration, custody or for other reasons.

2. Among those States Parties that have established these offenses, such offenses shall be considered acts of corruption for the purposes of this Convention.

3. Any State Party that has not established these offenses shall, insofar as its laws permit, provide assistance and cooperation with respect to these offenses as provided in this Convention.

Article XII - Effect on State Property

For application of this Convention, it shall not be necessary that the acts of corruption harm State property.

Article XIII - Extradition

1. This article shall apply to the offenses established by the States Parties in accordance with this Convention.

2. Each of the offenses to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offense in any extradition treaty existing between or among the States Parties. The States Parties undertake to include such offenses as extraditable offenses in every extradition treaty to be concluded between or among them.

3. If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it does not have an extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition with respect to any offense to which this article applies.

4. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offenses to which this article applies as extraditable offenses between themselves.

5. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the Requested State or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the Requested State may refuse extradition.

6. If extradition for an offense to which this article applies is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the Requested State deems that it has jurisdiction over the offense, the Requested State shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution unless otherwise agreed with the Requesting State, and shall report the final outcome to the Requesting State in due course.

7. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the Requested State may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent, and at the request of the Requesting State, take into custody a person whose extradition is sought and who is present in its territory, or take other appropriate measures to ensure his presence at extradition proceedings.

Article XIV - Assistance and Cooperation

1. In accordance with their domestic laws and applicable treaties, the States Parties shall afford one another the widest measure of mutual assistance by processing requests from authorities that, in conformity with their domestic laws, have the power to investigate or prosecute the acts of corruption described in this Convention, to obtain evidence and take other necessary action to facilitate legal proceedings and measures regarding the investigation or prosecution of acts of corruption.

2. The States Parties shall also provide each other with the widest measure of mutual technical cooperation on the most effective ways and means of preventing, detecting, investigating and punishing acts of corruption. To that end, they shall foster exchanges of experiences by way of agreements and meetings between competent bodies and institutions, and shall pay special attention to methods and procedures of citizen participation in the fight against corruption.

Article XV - Measures Regarding Property

1. In accordance with their applicable domestic laws and relevant treaties or other agreements that may be in force between or among them, the States Parties shall provide each other the broadest possible measure of assistance in the identification, tracing, freezing, seizure and forfeiture of property or proceeds obtained, derived from or used in the commission of offenses established in accordance with this Convention.

2. A State Party that enforces its own or another State Party's forfeiture judgment against property or proceeds described in paragraph 1 of this article shall dispose of the property or proceeds in accordance with its laws. To the extent permitted by a State Party's laws and upon such terms as it deems appropriate, it may transfer all or part of such property or proceeds to another State Party that assisted in the underlying investigation or proceedings.

Article XVI - Bank Secrecy

1. The Requested State shall not invoke bank secrecy as a basis for refusal to provide the assistance sought by the Requesting State. The Requested State shall apply this article in accordance with its domestic law,

its procedural provisions, or bilateral or multilateral agreements with the Requesting State.

2. The Requesting State shall be obligated not to use any information received that is protected by bank secrecy for any purpose other than the proceeding for which that information was requested, unless authorized by the Requested State.

Article XVII - Nature of the Act

For the purposes of articles XIII, XIV, XV and XVI of this Convention, the fact that the property obtained or derived from an act of corruption was intended for political purposes, or that it is alleged that an act of corruption was committed for political motives or purposes, shall not suffice in and of itself to qualify the act as a political offense or as a common offense related to a political offense.

Article XVIII - Central Authorities

1. For the purposes of international assistance and cooperation provided under this Convention, each State Party may designate a central authority or may rely upon such central authorities as are provided for in any relevant treaties or other agreements.

2. The central authorities shall be responsible for making and receiving the requests for assistance and cooperation referred to in this Convention.

3. The central authorities shall communicate with each other directly for the purposes of this Convention.

Article XIX - Temporal Application

Subject to the constitutional principles and the domestic laws of each State and existing treaties between the States Parties, the fact that the alleged act of corruption was committed before this Convention entered into force shall not preclude procedural cooperation in criminal matters between the States Parties. This provision shall in no case affect the principle of non-retroactivity in criminal law, nor shall application of this provision interrupt existing statutes of limitations relating to crimes committed prior to the date of the entry into force of this Convention.

Article XX - Other Agreements or Practices

No provision of this Convention shall be construed as preventing the States Parties from engaging in mutual cooperation within the framework of other international agreements, bilateral or multilateral, currently in force or concluded in the future, or pursuant to any other applicable arrangement or practice.

Article XXI - Signature

This Convention is open for signature by the Member States of the Organization of American States.

Article XXII - Ratification

This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.

Article XXIII - Accession

This Convention shall remain open for accession by any other State. The instruments of accession shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.

Article XXIV - Reservations

The States Parties may, at the time of adoption, signature, ratification, or accession, make reservations to this Convention, provided that each reservation concerns one or more specific provisions and is not incompatible with the object and purpose of the Convention.

Article XXV - Entry Into Force

This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the second instrument of ratification, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article XXVI - Denunciation

This Convention shall remain in force indefinitely, but any of the States Parties may denounce it. The instrument of denunciation shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States. One year from the date of deposit of the instrument of denunciation, the Convention shall cease to be in force for the denouncing State, but shall remain in force for the other States Parties.

Article XXVII - Additional Protocols

Any State Party may submit for the consideration of other States Parties meeting at a General Assembly of the Organization of American States draft additional protocols to this Convention to contribute to the attainment of the purposes set forth in Article II thereof.

Each additional protocol shall establish the terms for its entry into force and shall apply only to those States that become Parties to it.

Article XXVIII - Deposit of Original Instrument

The original instrument of this Convention, the English, French, Portuguese, and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States, which shall forward an authenticated copy of its text to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the United Nations Charter. The General Secretariat of the Organization of American States shall notify its Member States and the States that have acceded to the Convention of signatures, of the deposit of instruments of ratification, accession, or denunciation, and of reservations, if any.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Asamblea General

(2004-2006)

Thomas Buergenthal
Presidente Honorario

Sonia Picado
Presidenta

Rodolfo Stavenhagen
Vicepresidente

María Elena Martínez
Vicepresidenta

Mayra Alarcón Alba
Line Bareiro
Lloyd G. Barnett
César Barros Leal
Allan Brewer-Carías
Marco Tulio Bruni-Celli
Gisèle Côté-Harper
Margaret E. Crahan
Mariano Fiallos Oyanguren
Héctor Fix-Zamudio
Robert K. Goldman
Claudio Grossman
Juan E. Méndez
Sandra Morelli Rico
Pedro Nikken
Elizabeth Odio Benito
Nina Pacari
Máximo Pacheco Gómez
Mónica Pinto
Hernán Salgado Pesantes
Wendy Singh
Cristian Tattenbach

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Clare Kamau Roberts
Susana Villarán
Paulo Sérgio Pinheiro
José Zalaquett
Evelio Fernández Arévalos
Freddy Gutiérrez Trejo
Florentín Meléndez

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sergio García Ramírez
Alirio Abreu Burelli
Oliver Jackman
Antônio A. Cançado Trindade
Cecilia Medina Quiroga
Manuel E. Ventura Robles
Diego García Sayán

Roberto Cuéllar M.
Director Ejecutivo

Los programas y actividades del Instituto Interamericano de Derechos Humanos son posibles por el aporte de agencias internacionales de cooperación, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, agencias del sistema de Naciones Unidas, agencias y organismos de la Organización de Estados Americanos, universidades y centros académicos. Las diferentes contribuciones fortalecen la misión del IIDH, reforzando el pluralismo de su acción educativa en valores democráticos y el respeto de los derechos humanos en las Américas.